N°171

>> BOLETÍN

de la exclusión al RECONOCIMIENTO

ÍNDICE

OPINIÓN

Indolencia del Estado ante invasión del narcotráfico en Amazonía de Perú _____ pág. 2

DATOS

Datos sobre las principales problemáticas de la Amazonía _____ pág. 5

DOCUMENTOS

Extractos. Un problema de tres fronteras: detener la criminalidad en la Amazonía _____ pág. 9

Boletín virtual mensual sobre la lucha por el reconocimiento pleno de los derechos de todos los peruanos y peruanas, y contra la pobreza, así como sobre las acciones relativas a estos temas.

INDOLENCIA DEL ESTADO ANTE INVASIÓN DEL NARCOTRÁFICO EN AMAZONÍA DE PERÚ[1]

La invasión de territorios habitados por las comunidades indígenas de la Amazonia crece en Perú, a manos de mafias del narcotráfico que expanden los cultivos de coca para producir y exportar cocaína, mientras se incrementa la deforestación y la inseguridad para las poblaciones nativas y sus defensores.

"El narcotráfico no es un mito ni algo nuevo en esta zona y quienes ponemos el cuerpo para defender el derecho que tenemos a vivir en paz en nuestros territorios somos nosotros", afirmó el líder indígena del pueblo kakataibo Marcelo Odicio desde el municipio de Aguaytía, capital de la provincia de Padre Abad, en el departamento amazónico de Ucayali.

De los 33 millones de habitantes del país sudamericano, alrededor de 800,000 pertenecen a 51 pueblos indígenas amazónicos. En general, 96,4 % de la población indígena es quechua y aymara, con seis millones y asentada en las zonas andinas, mientras que los pueblos de la selva amazónica representan el restante 3,6 %.

Al Estado peruano se le denuncia en forma permanente por no atender las necesidades y demandas de esta población que enfrenta múltiples desventajas en materia de salud, educación, generación de ingresos y acceso a oportunidades. A ello se suman los crecientes impactos de la actividad del narcotráfico junto con la tala y la minería ilegal.

Un claro ejemplo de ello es la situación del pueblo kakataibo en dos de sus comunidades nativas, las de Puerto Nuevo y Sinchi Roca, ubicadas en la zona limítrofe de los departamentos de Huánuco y Ucayali en la región de la selva centro-oriental peruana.Hace varios años vienen denunciando y resistiendo ante la presencia de invasores que talan los bosques con fines ilícitos, mientras el Estado no los escucha y sigue sin hacerse cargo.

La amenaza más reciente los ha llevado a desplazar a su guardia indígena para defenderse de nuevos grupos de foráneos que a través de videos proclamaron su decisión de ocupar los territorios sobre los que el pueblo

[1]) 19 de Julio 2024, Tomado de https://ipsnoticias.net/2024/07/indolencia-del-estado-ante-invasion-del-narcotrafico-en-amazonia-de-peru/#google_vignette

kakataibo tiene derechos ancestrales, que, además, están respaldados por títulos otorgados por las autoridades departamentales.

La lucha por defender su territorio y su forma de vida ha costado la vida a varios de sus líderes. En los últimos años han sido asesinados seis dirigentes kakataibos, el más reciente Mariano Isacama, cuyo cuerpo fue hallado el domingo 14 de julio tras permanecer varias semanas desaparecido. En su entrevista con IPS, Odicio, presidente de la Federación Nativa de Comunidades Kakataibo (Fenacoka), lamentó la desidia de las autoridades por encontrarlo, tarea que asumió la guardia indígena. Isacama, de la comunidad nativa de Puerto Azul, había recibido amenazas que la federación sospecha que provenían de personas vinculadas al narcotráfico.

Durante una conferencia de prensa en Lima el 17 de julio, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), representante de las organizaciones indígenas que agrupa a 109 federaciones que a su vez representan a 2439 comunidades nativas, deploró la indolencia del gobierno ante la situación del líder desaparecido y asesinado, que eleva a 35 el número de indígenas amazónicos asesinados entre el 2023 y 2024.

Declararon en emergencia el territorio de los pueblos originarios amazónicos e hicieron un llamado a activar sus mecanismos de autodefensa y protección ante lo que denominaron "la violencia impune desatada por el narcotráfico, minería y tala ilegal al amparo de autoridades cómplices por abandono, inacción y corrupción".

Falta de visión sobre la Amazonia

La provincia de Aguaytía, donde se ubica el municipio de Padre de Abad y habitan los kakataibo, entre otros pueblos indígenas, concentraba para 2023 a 4,3 % de la superficie cultivada de hoja de coca, cerca de 4019 hectáreas, según el último informe de la gubernamental Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida).Es la sexta zona de producción con mayor superficie de este cultivo en el país. El informe destaca que Perú redujo en poco más de 2 % los cocales ilícitos entre 2022 y 2023, pasando de 95,008 a 92,784 hectáreas, y que frenó con ello la tendencia de una permanente expansión en los últimos siete años.

Estos datos son puestos en cuestión por el experto en políticas de drogas, seguridad y Amazonia, Ricardo Soberón., quien cuestiona la ausencia en los diferentes niveles del Estado de una agenda indígena que coloque como prioridad la situación de amenaza en que se encuentran los pueblos originarios amazónicos y sus comunidades por la actividad de mafias del narcotráfico, la tala y la minería del oro.

"El último informe mundial de drogas, el World Drug Report, indica que pasamos de 22 a 23 millones de usuarios de cocaína y que son espacios privilegiados para la producción y exportación el triángulo de oro en Birmania, la triple frontera de Argentina-Paraguay-Brasil y el trapecio amazónico", resumió a IPS. En esta última, "se ubican Putumayo y Yaguas, zonas que según Devida han reducido las 2000 hectáreas cultivadas. No me lo creo", dijo.

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), autora del informe, también señala a Perú como el segundo productor mundial de cocaína.Soberón sumó otro elemento que desacredita la conclusión del informe de Devida: el comportamiento del Estado. "No hay interdicción área en el trapecio amazónico, el convenio de interdicción no letal con Estados Unidos se operativizará el 2025; y por otra parte, hay denuncias contra la policía antidrogas en Loreto, departamento donde se ubican el Putumayo y Yaguas, por sus vínculos con mafias del Brasil", explicó.

En su análisis se ha pretendido lavar la cara a "un gobierno que tiene niveles de aislamiento absoluto", en referencia al que conduce desde diciembre de 2022 la presidenta interina Dina Boluarte, con niveles mínimos de aprobación y cuestionada por una serie de retrocesos democráticos.

Soberón fue director de Devida en 2011 y 2012 y en 2021 y 2022 y ha alertado en forma permanente sobre la gravedad de que el Estado en sus diferentes niveles no incorpore la agenda indígena en sus políticas contra las ilegalidades en sus áreas ancestrales. Ello, dijo, pese a la presión creciente sobre sus pueblos y territorios de "las mayores economías extractivas ilegales del mundo: narcotráfico, tala y minería del oro", causantes principales de la deforestación, pérdida de biodiversidad y despojo territorial.

Sostuvo que, dada la magnitud del tráfico de cocaína en el mundo, los grandes grupos de traficantes necesitan reservas de cultivo de coca, y que el territorio peruano es propicio para ello. Y deploró la mínima visión estratégica entre los actores políticos, económicos, comerciales y sociales sobre la Amazonia. Soberón señala, en base a diferentes investigaciones, que el puente del Cauca y Nariño, en el sur de Colombia, el Putumayo, en Perú, y zonas de Brasil, constituyen el trapecio amazónico: un espacio fluido de tránsito no solo de cocaína, sino de armas, insumos y oro.

De ahí la gran fluidez de cocaína en la zona, para su tráfico y distribución hacia Estados Unidos y otros mercados, y que convierte a los selváticos territorios indígenas de la Amazonia peruana en atractivos para los sembríos de coca y los laboratorios de cocaína.

El especialista se reafirmó en que sí es posible compatibilizar la política antidrogas con la protección de la Amazonia, como por ejemplo impulsando los pactos sociales ciudadanos que él mismo desarrolló en forma piloto durante su gestión.Se trata, dijo, de poner el protagonismo y la decisión en los propios actores sociales como son los pueblos indígenas. Pero para ello se requiere una clara voluntad política, lo que no se observa en la actual gestión de Devida.

"Nos nos quedaremos de brazos cruzados"

Odicio, el presidente de Fenacoka, sabe que la mayor presencia de invasores en sus territorios tiene por finalidad la siembra de pastizales y de hoja de coca, actividad que destruye sus bosques. Inclusive han instalado pozas de maceración cerca a las comunidades. Explicó que al llegar tumban los árboles, queman, hacen ganadería, se posesionan y luego piden derecho de titulación. "Después de la ley antiforestal se sienten fuertes y dicen que tienen derecho a la tierra, cuando no es así", sostuvo.

Se trata de la reforma de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 29763, en vigor desde diciembre del 2023, que debilita aún más la seguridad de los pueblos indígenas sobre sus derechos territoriales y abre las puertas a actividades extractivas legales e ilegales.

El dirigente, con esposa y dos menores hijos, sabe que el rol de defensor lo expone. "Nosotros somos los que pagamos las consecuencias, estamos visibles frente a los delincuentes, nos tildan de soplones, pero seguiré defendiendo nuestros derechos, con la guardia indígena haremos respetar la autonomía de nuestro territorio", subrayó.

En la comunidad nativa de Puerto Nuevo son 200 familias y 500 en la de Sinchi Roca, de pobladores kakataibos que viven del uso sostenible de sus recursos forestales, los que se encuentran en riesgo por las actividades ilícitas. "Solo queremos vivir en paz, pero nos defenderemos porque no podemos quedamos de brazos cruzados si no respetan nuestra autonomía", recalcó.

Datos sobre las principales problemáticas de la Amazonía

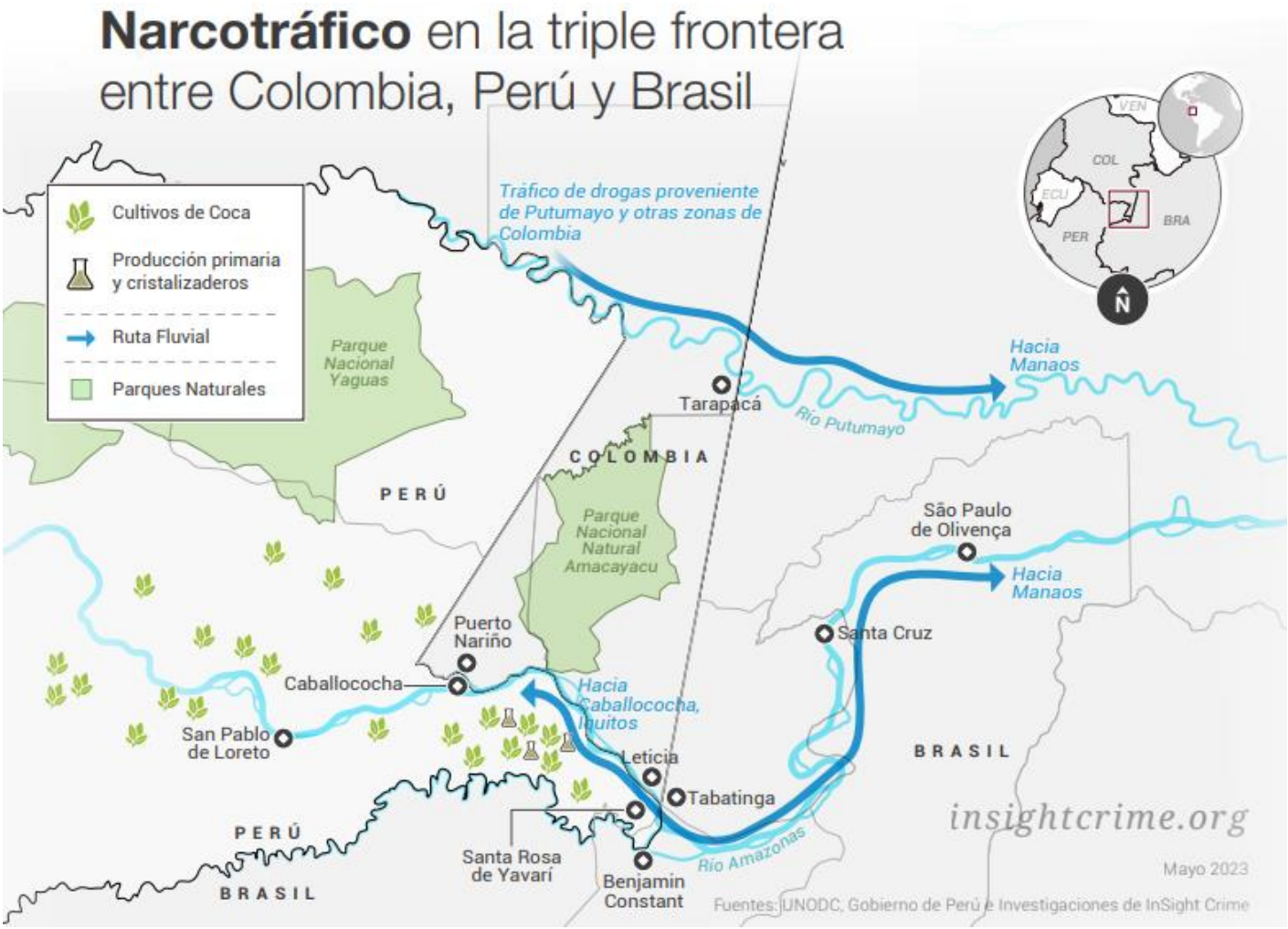
1. Tala ilegal

Tomado de: Insight Crime, Instituto Igarape Las raíces de los delitos ambientales en la Amazonía Peruana, junio 2022, p.19

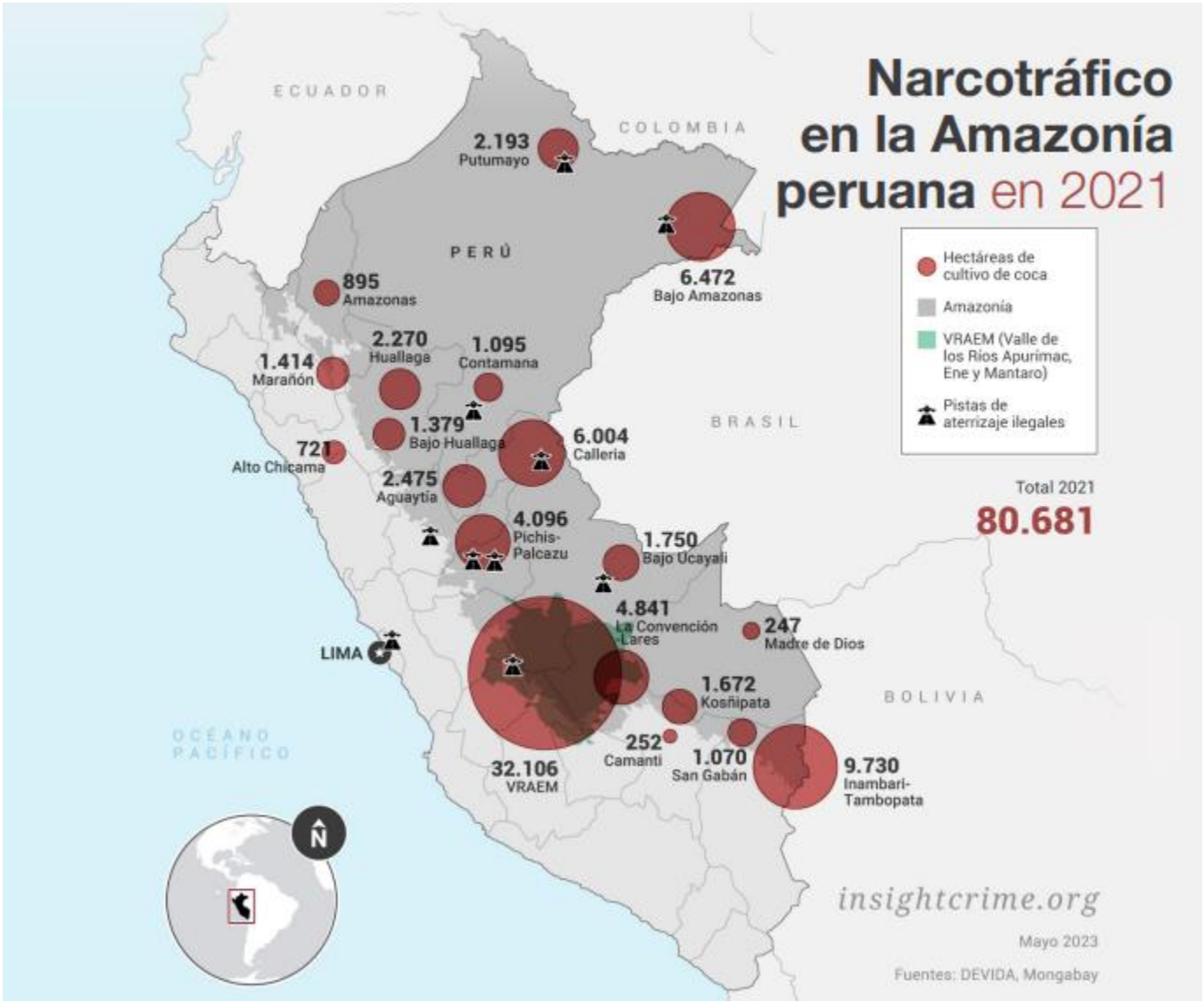
2. Minería ilegal

Tomado de: Ricardo Valdés, Carlos Basombrío, Dante Vera Minería no formal en el Perú Realidades, tendencias y ¿soluciones? Elaborado por Capital Humano y Social S.A. En cooperación con: Fundación Konrad Adenauer (KAS), diciembre 2019.p.12

3. Narcotráfico



Tomado de: Insight Crime-Instituto Igarapé, La Amazonía saqueada:
las raíces de los delitos ambientales en las regiones de triple frontera, 2023, p.35



Tomado de: Insight Crime-Instituto Igarapé, La Amazonía saqueada:
las raíces de los delitos ambientales en las regiones de triple frontera, 2023, p.37

EXTRACTOS. UN PROBLEMA DE TRES FRONTERAS: DETENER LA CRIMINALIDAD EN LA AMAZONÍA. INFORME BREVE DE CRISIS GROUP SOBRE AMÉRICA LATINA N°51

Bogotá/Bruselas, 17 de julio de 2024

"En la región donde Brasil, Colombia y Perú confluyen en las profundidades de la Amazonía, una variedad de organizaciones criminales aprovecha la escasa presencia estatal, la abundancia de recursos naturales y la pobreza de las comunidades locales para crecer, diversificarse e incubar nuevas empresas criminales transfronterizas.

Envalentonados por el escaso control de las autoridades estatales en esta vasta área, grupos criminales brasileños se han asociado con facciones de guerrillas colombianas y grupos narcotraficantes peruanos. Están involucrados en una serie de actividades ilegales, desde el cultivo de coca y su procesamiento en cocaína hasta la tala de árboles, el dragado en busca de oro y la pesca en áreas protegidas.

A medida que aumenta la renta criminal, se dispara el daño ambiental en la Amazonía y la violencia contra la población local, así como los incentivos económicos para que los pobladores locales más necesitados se enlisten en alguno de estos grupos.

Perú, por su parte, se ha convertido en el motor de la producción de cocaína en la zona, causando graves daños ambientales a lo largo de la frontera. Los cultivos de coca, que crecen en los bosques arrasados, han experimentado un auge en la provincia fronteriza peruana de Mariscal Ramón Castilla, a menudo financiados por inversionistas colombianos o brasileños y aprovechando la mano de obra local para atender los cultivos. La hoja se procesa en laboratorios que vierten contaminantes al suelo y al agua, y el producto final se transporta en gran medida sin control a lo largo del Amazonas y sus afluentes.

Las organizaciones ilegales con frecuencia reinvierten las ganancias del narcotráfico en otros negocios que causan graves daños ambientales, como la tala, el dragado y la pesca ilegal, permitiéndoles lavar sus ingresos mientras generan aún más dinero. Las comunidades indígenas han intentado defender sus territorios de las incursiones de los grupos criminales, pero muchas afirman no haber recibido apoyo del Estado ni de las fuerzas de seguridad.

El papel de la Amazonía en la regulación climática hace que la inseguridad en la triple frontera sea un asunto de preocupación mundial. Al ser la selva tropical más grande del mundo, la Amazonía sirve como un importante sumidero de carbono, absorbiendo grandes cantidades de dióxido de carbono atmosférico. Por su papel central en el ciclo hidrológico, la Amazonía también ejerce una profunda influencia en el clima global y los patrones de precipitación. Su incomparable biodiversidad es esencial para mantener el equilibrio ecológico. Pero a medida que el crimen organizado se extiende por la Amazonía, le impone una alta carga a la región, alimentando la violencia, desintegrando comunidades y agravando la deforestación y otros tipos de degradación ambiental.

El objetivo actual de Comando Vermelho, según uno de sus integrantes, es afirmar su supremacía en la región de la triple frontera con la esperanza de expandirse a Colombia y Perú. El grupo quiere controlar toda la cadena de suministro de cocaína desde los cultivos de coca en Perú hasta las rutas del narcotráfico en Colombia y las regiones amazónicas de Brasil. Para conseguirlo, ofrecen incentivos a los locales aprovechando la falta de oportunidades laborales lícitas. Los criminales pagan a reclutas, hombres y niños de hasta tan sólo quince años, sumas que oscilan entre los US$ 2,000 y US$ 2,400 por tareas como transportar cocaína a Manaos, introduciéndolos en la vida delictiva y, con frecuencia, animándolos a reclutar a otros.

Comando Vermelho también dice proporcionar ayuda económica, medicamentos y alimentos a familias necesitadas de las zonas que controla. Su principal objetivo, como lo describe uno de sus integrantes, es “conquistarlo todo”, dominar los mercados y las poblaciones locales.

Se estima que el 70% de la cocaína y la pasta base producidas en Perú se trafica luego hacia Brasil, mientras que alrededor del 30% se lleva a Ecuador, principalmente a través del río Napo. Los agentes de seguridad admiten que la agencia antinarcóticos de Perú, la Dirección Antidrogas, no tiene presencia activa en algunas de las principales rutas de tráfico de drogas.

Los grupos criminales se están diversificando cada vez más hacia la tala, el dragado de oro y la pesca ilegal. Estas actividades les permiten lavar el dinero obtenido del narcotráfico: los funcionarios estatales en Brasil hablan de la “narcominería” y de los “narcotaladores” para describir cómo las ganancias de las drogas se reinvierten en las industrias de la madera y el oro.

Los grupos criminales se han involucrado particularmente en la pesca ilegal. (La actividad es considerada ilegal si se lleva a cabo infringiendo las regulaciones gubernamentales durante ciertos meses del año o en áreas protegidas). Algunas especies de peces amazónicos alcanzan precios elevados, en particular el A*rapaima gigas*, conocido como pirarucú en Brasil y paiche en Perú. Años de sobrepesca no regulada han agotado las poblaciones de pirarucú, lo que ha llevado a los gobiernos de Brasil, Colombia y Perú a clasificarlo como una especie protegida.

Sin embargo, eso no ha afectado mucho el mercado, y quienes logran exportarlo fuera de la Amazonía obtienen ganancias considerables. Mientras que los mercados locales suelen ofrecer pirarucú a precios que oscilan entre US$ 1,50 y US$ 2,50 por kg, en Leticia los precios suben a alrededor de US$ 6 antes d que el pescado sea transportado fuera de la región. Estos márgenes de ganancia han llevado a los narcotraficantes a invertir en grandes operaciones pesqueras, desafiando las regulaciones estatales para prevenir la sobrepesca. Además, hay informes de que los cargamentos de pescado son usados para ocultar narcóticos.

La tala y el procesamiento ilegal de madera también proliferan en la Amazonía. Para legalizar la madera brasileña talada ilícitamente, los delincuentes utilizan documentos peruanos falsificados. La madera

talada ilegalmente en Perú también es llevada a Colombia con documentación falsa. Autoridades locales corruptas facilitan estas actividades y los funcionarios reciben a cambio sobornos de los traficantes de madera. Los narcotraficantes también utilizan la madera para ocultar cocaína.

El dragado de oro, especialmente a lo largo del río Purué (conocido como Puré en Colombia), también ha ido en aumento. Comando Vermelho presuntamente financia operaciones extractivas ilegales en ocasiones y, en algunos casos, compra el oro directamente a los mineros. Los mineros locales también se quejan de que las guerrillas colombianas y oficiales corruptos de la Policía Militar brasileña a menudo extorsionan a quienes trabajan en el río, exigiendo una determinada cantidad de oro por draga minera.

Las fuerzas de seguridad en la zona carecen de equipo, personal y preparación para responder a la violencia y la degradación ambiental provocadas por la expansión del crimen organizado. La policía y otras fuerzas de seguridad en toda la región de la triple frontera reconocen la necesidad de coordinar mejor su lucha contra la delincuencia. “Lo que pasa ahí, nos afecta aquí”, dijo un funcionario colombiano, refiriéndose a la delincuencia al otro lado de las fronteras con Perú y Brasil. El hecho de que ninguna de las fuerzas de cada país pueda perseguir o arrestar a delincuentes fuera de su propia jurisdicción es una de las razones por las que los grupos ilegales pueden operar con impunidad en la región.

La falta de recursos también dificulta la capacidad de las fuerzas de seguridad para enfrentar al crimen. La situación de la policía en la ciudad peruana de Islandia que en efecto es una isla, es reveladora. Sus dos lanchas están dañadas; como resultado, no pueden perseguir a los traficantes de drogas y madera que pasan libremente por el frente de su puesto de control. Los funcionarios reunieron su propio dinero para comprar un enrutador wifi, pero no han podido pagar el servicio de internet y carecen de una impresora que funcione para documentos oficiales.

Por otra parte, los bajos salarios de los funcionarios estatales han generado una corrupción rampante en los tres países fronterizos. Agentes de policía de la provincia peruana Mariscal Ramón Castilla se han visto implicados en la facilitación del tráfico de drogas e incluso han participado directamente en actividades ilícitas.

Mujeres jóvenes y niñas de comunidades ribereñas de la parte colombiana y peruana del río Amazonas suelen ser atraídas, a veces con pretextos, para trabajar en zonas de cultivos de coca en Perú, donde frecuentemente son sometidas a explotación sexual o incluso asesinadas. La violencia sexual está especialmente extendida en las comunidades indígenas, y a menudo va de la mano del consumo de alcohol.

Líderes indígenas en Perú han denunciado a funcionarios estatales por vender a inversores privados parcelas de tierra dentro de territorios indígenas legalmente demarcados.

Dado lo mucho que está en juego no sólo para aquellos expuestos al reclutamiento sino para la propia supervivencia de las comunidades indígenas, los miembros de estos grupos han organizado sus propias guardias, vigilando los ríos y otros puntos de acceso a sus tierras. Aunque estas iniciativas podrían, en teoría, funcionar como un sistema de alertas tempranas para los funcionarios gubernamentales que tratan de evitar las incursiones de los grupos criminales, esto no ha ocurrido en la práctica.

Líderes indígenas en Perú han informado de la presencia miembros de Os Crías y Comando Vermelho en las poblaciones de Bellavista Callaru, Santa Rosa y Caballococha.

El aumento de la actividad criminal en la región fronteriza ha generado daños ambientales, aunque no al ritmo observado en otras partes de la Amazonía. En toda la cuenca del

Amazonas, la ganadería y la agricultura industrial son las principales fuerzas que destruyen la selva tropical. Ese no es el caso en la región de la triple frontera, particularmente en Perú, donde las plantaciones de coca (que requieren arrasar menos hectáreas de bosque que otras actividades) son el principal motor de la degradación ambiental.

No son sólo los cultivos de coca, sino también la producción de cocaína lo que está dañando la selva. En el proceso de la elaboración de pasta básica de cocaína, los laboratorios operados por grupos criminales vierten residuos químicos (entre ellos acetona, gasolina y ácido sulfúrico) en los ríos y el suelo de la Amazonía.

Las gigantescas dragas mineras remueven tanto sedimento en busca de finas concentraciones de oro que en ocasiones se altera el curso de los ríos. Cada una de estas máquinas pueden costar hasta US$ 500,000; pero las ganancias son tan grandes que los operadores recuperan su inversión en unos pocos meses.

Otro efecto alarmante de la búsqueda de oro es la descarga de mercurio en los ríos y tierras circundantes, el cual puede causar daños irreversibles al sistema nervioso de quien lo ingiere. Análisis de sangre de los indígenas que habitan a lo largo de los ríos donde operan las dragas mineras registran niveles de mercurio muy por encima de lo que se considera seguro.

Los tres países fronterizos deben abordar las condiciones socioeconómicas que llevan a los pobladores a unirse a los grupos criminales. Por ejemplo, podrían considerar aunar recursos y esfuerzos para llevar servicios estatales a zonas transfronterizas como clínicas móviles (con personal calificado para asistir a las víctimas de violencia de género) y escuelas que puedan llegar a poblaciones en lugares remotos donde es poco probable que se construyan instalaciones permanentes.

Las respuestas a emergencias climáticas, como inundaciones, sequías e incendios forestales, serían más eficaces si los equipos transnacionales también pudieran operar cruzando las fronteras y disponer de fondos tanto nacionales como de donantes extranjeros. Al mismo tiempo, las autoridades de los tres países deben ser conscientes del potencial impacto de nuevas políticas en los medios de subsistencia de las personas que habitan la zona. Aunque proteger el ecosistema es crucial, reprimir las economías de subsistencia sin proporcionar alternativas legales de empleo podría empujar a más personas a involucrarse en actividades delictivas".